

Disputas territoriales en el Valle del Intag en Ecuador: de la resistencia social contra la mega-minería a la creación de alternativas al desarrollo

Juan Wahren

Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG).
Coordinador del Grupo de Estudios Rurales-Grupo de Estudios sobre Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL) del IIGG.
e-mail: juanwahren@gmail.com

Agustina Schwartz

Doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Becaria doctoral del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET).
Integrante del Grupo de Estudios Rurales-Grupo de Estudios sobre Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)
e-mail: agustinaschwartz@gmail.com

Resumen

En este artículo nos proponemos analizar y comprender los procesos de acción colectiva de los pobladores del Valle de Intag- Municipio de Cotacachi, provincia de Imbabura, Ecuador- en oposición a proyectos de explotación minera en la región por parte de compañías transnacionales de Japón y Canadá entre los años 1995 y la actualidad. Nos proponemos indagar acerca de las acciones colectivas de diferentes actores sociales donde se combinan acciones de protesta con proyectos productivos, culturales y organizativos que dan cuenta de formas de desarrollo alternativo al modelo hegemónico. En este sentido, nos interesa profundizar en las miradas críticas al “desarrollo” que subyacen en estas experiencias de acción colectiva de los movimientos sociales. Este trabajo se basa en una metodología cualitativa a través del uso de entrevistas y observaciones de campo.

Palabras claves: Movimientos Sociales; Desarrollo; Minería; Territorio; Extractivismo

Disputas territoriais no Valle do Intag, Equador: Da resistência social contra a mega-mineira à criação de alternativas ao desenvolvimento

Resumo

Neste artigo analisamos as ações coletivas no Valle do Intag, Equador, contra os projetos mineiros das empresas transnacionais do Japão e Canada. Nessas ações coletivas um heterogêneo movimento social combina protestas públicas e diversos projetos produtivos e culturais com a meta do desprejar um modelo do desenvolvimento alternativo. Esta pesquisa tem um enfoque qualitativo a través dele uso de entrevistas e observações de campo na região do Valle do Intag.

Palavras-Chave: Movimentos Sociais; Desenvolvimento; Mineira; Território; Extractivismo

Territorial conflicts in Intag Valley, Ecuador: From social resistance against mining enterprises to the development alternatives

Abstract

In this article we analyze the collective actions in Intag Valley, Ecuador against the mining projects from transnational enterprises from Japan and Canada. In these collective actions, a heterogeneous social movement combine public protests with different productive and cultural projects with the objective to deploy an alternative development model. This work is based in a qualitative research perspective and we utilize interviews to some social movements leaders and field observation in the region of Intag Valley, Ecuador.

Keywords: Social Movements; Development; Mining; Territory; Extractivism

Introducción

En este artículo nos proponemos analizar y comprender los procesos de acción colectiva de los pobladores del Valle de Intag- Municipio de Cotacachi, provincia de Imbabura, Ecuador- en oposición a proyectos de explotación minera en la región por parte de compañías transnacionales de Japón y Canadá entre los años 1995 y la actualidad. Nos proponemos indagar acerca de los momentos de “visibilidad” y “latencia” en el marco de las acciones colectivas de diferentes actores sociales donde se combinan repertorios de acciones de protesta con el entramado de proyectos productivos (cooperativas agrícolas y cafetaleras, tiendas de comercio justo, turismo comunitario, etc.) que dan cuenta de formas de desarrollo alternativo al modelo hegemónico. En este sentido, nos interesa profundizar en las miradas críticas al “desarrollo” que subyacen en estas experiencias de acción colectiva de los movimientos sociales. En efecto, los movimientos sociales que resisten las avanzadas del extractivismo en América Latina son varios y heterogéneos, sin embargo resulta difícil encontrar casos donde los propios movimientos hayan logrado desarrollar alternativas concretas a este modelo de desarrollo.

El caso de la resistencia social en el Valle del Intag, como veremos, plantea la singularidad de desplegar múltiples alternativas ancladas en el territorio que disputan los propios actores. Para ello, resulta necesario brindar algunas reflexiones analíticas en torno a la noción de territorio que utilizamos en nuestro análisis.

Definimos al territorio como un espacio geográfico atravesado por relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que es resignificado constantemente- a través de relatos míticos- por los actores que habitan y practican ese espacio geográfico, configurando un escenario territorial en conflicto por la apropiación y reterritorialización del espacio y los recursos naturales que allí se encuentran. Se configura, en definitiva, un territorio yuxtapuesto atravesado por relaciones de diálogo, dominación y conflicto entre diversos actores sociales, así como por sus diversos modos de utilizar y significar esos mismos territorios y recursos naturales (WAHREN, 2011).

El territorio aparece entonces como una categoría compleja, móvil y en un permanente proceso de resignificación y disputa. En efecto, la idea de territorio no puede separarse de la noción de conflicto entre diferentes actores sociales en un proceso dinámico de territorialización - desterritorialización - reterritorialización (FERNANDES, 2005, PORTO GONCALVES, 2002) que implica, a su vez, una reificación de las identidades sociales de los actores que habitan y practican esos territorios. En última instancia, el territorio es un espacio multidimensional donde los actores sociales producen y reproducen la cultura, la economía, la política, en definitiva, la vida en común.

A partir de estas definiciones sobre el territorio, utilizamos el concepto de “movimiento socioterritorial” del geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes (2005), el

cual nos permite focalizarnos sobre los movimientos sociales que hacen del territorio un espacio de construcción social y de dotación de sentido (FERNANDES, 2005). En este sentido, consideramos con Zibechi (2003) que los procesos de territorialización es uno de los factores que habilita la construcción de autonomía por parte de los movimientos sociales. En estos casos es dónde se introduce la problemática del territorio como un espacio en disputa, construido por actores sociales antagónicos que resignifican ese espacio geográfico determinado, lo habitan, lo transforman y lo recrean de acuerdo a sus intereses y formas de vida y de reproducción social específicas. Así, los territorios se conforman como espacios geográficos pero al mismo tiempo se constituyen como espacios sociales y simbólicos, atravesados por tensiones y conflictos. El territorio aparece dotado de sentidos políticos, sociales y culturales.

Desde esta construcción particular y contingente que se desarrolla en los momentos de latencia de los movimientos, es que podemos pensar a los espacios en los cuales algunos movimientos sociales interactúan, como “territorios en disputa”. En estos territorios los movimientos sociales despliegan su potencia política, construyen los “laboratorios clandestinos para el antagonismo y la innovación” de los que nos habla Melucci (1994) para describir los momentos de latencia de la acción colectiva de los movimientos sociales.

Este proceso de territorialización de los movimientos sociales genera una disputa concreta en el territorio; una disputa que adquiere, entonces, un sentido político. Esta disputa en la “interface territorial” implica así una confrontación de mundos sociales y políticos con otros actores (por ejemplo, el Estado, las empresas, ONG’s, entre otros). Estos movimientos sociales territorializados -campesinos, pueblos indígenas, trabajadores desocupados, etc.- emergen con fuerza en el espacio público enfrentando a los escenarios estructurales construidos desde las políticas neoliberales. La tierra y los recursos naturales que se encuentran en estos espacios geográficos, resultan en la actualidad en elementos estratégicos para la reproducción del sistema económico hegemónico sea en la lógica extractiva de minerales, hidrocarburos, agua, agronegocios, turismo o intereses inmobiliarios.

Es este mismo anclaje territorial o esta construcción de territorialidad la que da una característica singular a estos movimientos, y, a modo de hipótesis, podemos reflexionar si no es esta misma territorialidad la que permite a estos movimientos reconstruir identidades y lazos sociales de manera perdurable en el tiempo (y en un territorio específico). En este sentido, podemos denominar como “territorios insurgentes” (WAHREN, 2011; AGUILÓ y WAHREN, 2014) a aquellos territorios practicados de manera preponderante por los movimientos sociales, donde se ponen en práctica “campos de experimentación social” (SANTOS, 2003) que van “más allá” de los esquemas del sistema/mundo colonial y capitalista sobre los territorios, y donde las relaciones entre quienes habitan esos territorios y la naturaleza se da en torno a relaciones de reciprocidad, signados por la capacidad de los propios actores sociales de autogestionar esos territorios y los recursos naturales que allí se encuentran. Retomando la idea de latencia de la acción colectiva de los movimientos sociales (MELUCCI, 1994), planteamos que el territorio habitado y practicado habilita una dimensión disruptiva -y a su vez creativa- de los movimientos sociales que se mantiene en el espacio-tiempo a partir de la recreación de prácticas y discursos que van “más allá” de la política institucional y con una temporalidad que trasciende -y a la vez fortalece- las acciones colectivas de protesta, es decir aquellos momentos de “visibilidad” en el espacio público de los movimientos sociales (MELUCCI, 1994).

Esta territorialidad subalterna, al no estar escindida del conjunto de la sociedad, mantiene la disruptividad en relación al sistema/mundo hegemónico que signa la territorialidad. En este sentido, los “territorios insurgentes” no se encuentran exentos de conflictividad social pues si bien las formas predominantes de habitarlo y practicarlo están signadas por los movimientos sociales, la territorialidad capitalista/colonial continúa atravesando esos territorios en sus múltiples dimensiones, aunque ya no de manera hegemónica. En este sentido no pueden entenderse a los “territorios insurgentes” como territorios aislados del sistema/mundo hegemónico y sin conflictividad, sino inmersos en las disputas y espacios de diálogos y negociaciones que mantienen los movimientos sociales

con los distintos actores que se enfrentan e interrelacionan en el territorio: el Estado, empresas, ONG's, etc.

Por último, este trabajo utiliza un enfoque metodológico netamente cualitativo basado en entrevistas a distintos referentes de diversas organizaciones que componen el movimiento social de resistencia frente a la megaminería en el Valle del Intag y observaciones de campo que nos permitieron conocer el entramado de las distintas experiencias organizativas, productivas y culturales que despliegan los colectivos y organizaciones del Valle del Intag (emprendimientos de turismo ecológico y comunitario, cooperativas de productores de café, proyectos productivos autogestionados, espacios culturales, tiendas de comercio justo y comercialización alternativa, medios de comunicación comunitarios, talleres de mujeres, grupos de jóvenes, organizaciones ecologistas, etc.)

Los procesos de “acumulación por desposesión” y “mercantilización de la naturaleza” en América Latina: debates, resistencias y alternativas.

Desde finales del siglo XX se fue consolidando en toda América Latina un nuevo modelo de acumulación de capital caracterizado como extractivo- exportador (GIARRACCA, 2005; SVAMPA y ANTONELLI, 2009; ACOSTA, 2011; GIARRACCA y TEUBAL, 2013; SVAMPA y VIALE, 2014). Su expansión y consolidación en el desarrollo del capitalismo fue configurando el pasaje de un proceso de acumulación expansiva del capital a lo que Harvey (2004) denomina un *proceso de acumulación por desposesión*, donde el sistema, para mantener su proceso de reproducción ampliada del capital, no requiere únicamente de un proceso previo u “originario” de acumulación extrayendo los recursos naturales y la tierra, sino que esta acumulación por desposesión es un proceso permanente e inherente del capitalismo que incluye:

“la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad- común, colectiva, estatal, etc.- en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito” (Harvey, 2005:113).

Actualmente, este proceso puede vislumbrarse en América Latina en el incremento de actividades destinadas a la explotación y exportación de recursos naturales a gran escala (minería a cielo abierto, agronegocio, pasteras, hidrocarburos, etc.), así como en la implementación de proyectos supranacionales tendientes al desarrollo de infraestructura a través del IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional Suramericana) y acordados por algunos gobiernos latinoamericanos, “cuyo objetivo central es facilitar la extracción y exportación de dichos productos hacia sus puertos de destino” (SVAMPA, 2011:3). De alguna manera el proceso actual de explotación de los recursos naturales por parte de las empresas transnacionales, con el apoyo estratégico de los países imperiales centrales, se encuentran realizando “la tarea incumplida de la acumulación primitiva , lo que es más que nunca visible en el intento imperial de controlar la tierra, el agua dulce, la biodiversidad y los recursos naturales por vía de la guerra, la ocupación, la presión diplomática, la instalación de bases militares disuasorias” (SANTOS, 2010:45). En este sentido, si bien la explotación y exportación de recursos naturales ha estado siempre presente en la historia del capitalismo, lo que caracteriza a este último período es la intensificación de “la expansión de proyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales a gran escala” (SVAMPA y ANTONELLI, 2009); la aplicación de distintas tecnologías de punta que

posibilitan la sobre explotación de ciertos recursos, como por ejemplo la tierra; a la vez que la incorporación a la producción de territorios históricamente considerados como improductivos (SVAMPA, 2011; GIARRACCA y TEUBAL, 2010).

Este esquema de acumulación por desposesión en América Latina se da en el marco de dos grandes procesos, uno económico y otro político, que signan la actual coyuntura continental. El primero, de carácter económico, se encuentra ligado al fuerte incremento en la rentabilidad de las actividades extractivas que responde no sólo al aumento en la demanda y los precios internacionales de los *commodities*, sino también a los bajos costos relativos que tiene el desarrollo de estas actividades en la mayoría de los países latinoamericanos. Estas particularidades, expresadas en términos de “ventajas comparativas”, se deben a la renta diferencial que se genera a partir de la gran disponibilidad y calidad de los recursos existentes en los distintos territorios (GIARRACCA y TEUBAL, 2010), así como también a los marcos regulatorios implementados a partir de la década del 90 que promueven, a través de diversos mecanismos, el desarrollo de estas actividades (TEUBAL, DOMÍNGUEZ y SABATINO, 2005; SVAMPA y ANTONELLI, 2009).

Por otro lado, el segundo proceso -de carácter político- se caracteriza por la reactivación de una política *neodesarrollista* “con base extractivista [y que] aparece muy vinculada a la noción de «superación de la crisis», tanto en relación a los años noventa, cuando los países latinoamericanos afrontaron en un contexto neoliberal procesos de fuertes crisis económicas (de carácter endógeno), como en el marco de la crisis estructural que hoy vive el capitalismo (vista como exógena)” (SVAMPA, 2011). En efecto, una ola de nuevos gobiernos latinoamericanos, ligados a discursos y tradiciones progresistas, irrumpieron desde fines del siglo XX en distintos países latinoamericanos del Cono Sur. Estos gobiernos emergieron con consignas de renovación política y en confrontación –al menos discursiva- con las políticas neoliberales de la década de los noventa y con posiciones cercanas a los conceptos del desarrollo nacional que rescatan algunos de los postulados “cepalinos” de mediados del siglo XX con una recuperación del rol económico, político y social del Estado y cierta redistribución de la riqueza a través de planes sociales focalizados que se masificaron con distintas dimensiones en cada uno de estos países (ZIBECCHI, 2011). De este modo caracterizamos a estos gobiernos como “neodesarrollistas/neoextractivistas” ya que su discurso plantea una recuperación del “desarrollo nacional” con limitadas políticas sociales redistributivas, a la vez que mantienen una lógica extractiva, basada en las ventajas comparativas de la renta diferencial de los recursos naturales existentes en la región. En este sentido, no sólo no cambia el modelo de acumulación anterior, sino que por el contrario, lo profundiza en términos de dependencia económica y de primarización de las economías nacionales. Como plantea Maristella Svampa, “en este nuevo contexto, los gobiernos latinoamericanos optaron, en su mayoría, por aprovechar esta «oportunidad» que les brindaba el sistema económico mundial, escamoteando el debate acerca de las consecuencias socio-ambientales que conllevaría esta política neo-desarrollista con base extractivista” (SVAMPA, 2001).

Este modelo extractivo “neodesarrollista” implica, entonces, una serie de consecuencias políticas, sociales, económicas y ambientales para los países latinoamericanos. Una de las principales consecuencias es que al estar orientado a la producción de *commodities* exportables y bajo el control de los grandes capitales transnacionales, ha provocado según Svampa (2011) y Giarracca y Teubal (2010) no sólo un proceso de “reprimarización de la economía”, sino también un incremento en el peso de estos actores económicos en las economías nacionales. En este sentido, los autores también señalan que este nuevo modelo de acumulación va configurando economías de enclave en los distintos territorios en donde, por un lado, el control de las decisiones de inversión y del proceso productivo depende directamente de los capitales extranjeros, a la vez que su producción no mantiene relación con las economías locales (CARDOSO y FALETTO, 1999); por otro lado, los beneficios generados no son sustancialmente percibidos por las poblaciones y los estados nacionales, sino que esa ganancia es- por medio de exenciones impositivas y apropiación de la renta- acaparada primordialmente por las empresas transnacionales.

Otra de las consecuencias ha sido el surgimiento de numerosos conflictos socioambientales, entendidos como “aquellos ligados al acceso y control de los recursos naturales, que suponen por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de asimetría de poder” (SVAMPA, 2011:4). En efecto, la utilización de productos altamente contaminantes, que forman parte de las tecnologías de punta para la obtención de los recursos (glifosato en la producción agrícola; ácido sulfúrico en las pasteras, cianuro en la minería, etc.), así como también el alto consumo de recursos no renovables como el agua, la tierra fértil, la biodiversidad, etc. hace que el despliegue de estas actividades en los distintos territorios sea altamente conflictivo. Esto encuentra su fundamento tanto en la competencia que generan estas actividades con las tradicionalmente existentes (agricultura, ganadería, turismo, etc.) en torno al acceso y disponibilidad de los recursos (muchas veces ya de por sí escasos), así como por la amenaza que suponen para la conservación y reproducción del ambiente (GIARRACCA y TEUBAL, 2010).

La cantidad de conflictos que ha generado la expansión de este modelo pone de manifiesto la existencia de distintas formas de apropiación, utilización y sentido otorgado por los actores sociales a la naturaleza. En este sentido, nos parece importante establecer brevemente una mirada crítica hacia la idea de desarrollo. Esta noción surge con la consolidación del “sistema/mundo capitalista/colonial” (WALLERSTEIN, 1989) en el marco de la Modernidad e identifica al desarrollo con el mejoramiento de la calidad de vida e indicadores de bienestar material, la reducción de la pobreza y los procesos de industrialización (VIOLA, 2000) en base al modelo industrial surgido en Europa Occidental a partir de la denominada Revolución industrial. Éste se convirtió en el modelo global deseable de desarrollo para el conjunto de los países a través de la hegemonía política, económica y cultural de los países centrales. Así, la noción de desarrollo:

“convirtió la historia en un programa, un destino necesario e inevitable. El modo industrial de producción, que no era más que una forma social entre muchas, se transformó por definición en el estadio terminal de una evolución social unilineal (...) La metáfora del desarrollo confirió hegemonía global a una genealogía de la historia puramente occidental, robando a las gentes y pueblos de distintas culturas la oportunidad de definir las formas de su vida social” (ESTEVA, 2000:73).

De esta manera, la noción de desarrollo expropia los saberes y las prácticas culturales, políticas y económicas subalternas subsumiéndolas a la idea de “subdesarrollo” como aquello que necesita evolucionar hacia el estadio ideal del progreso, es decir la modernización y la industrialización, la mercantilización de todas las esferas de la vida social y de la naturaleza. El desarrollo entonces remite a una red semántica ligada a las nociones de crecimiento, evolución, maduración y modernización que implica también “una imagen de futuro que era una mera continuación del pasado, es decir, el desarrollo, un mito conservador, si no reaccionario” (ESTEVA, 2000:98).

De este modo, en este proceso de apropiación de la renta de la naturaleza en pos del progreso y el desarrollo existe también una apropiación discursiva y material que resignifica la naturaleza como recursos naturales. Así, “el discurso utilitario reemplaza el término naturaleza con el término recursos naturales, focalizando en esos aspectos de la naturaleza que pueden ser apropiados para el uso humano [...] las plantas consideradas valiosas devienen cultivos, las especies que compiten con ellas se estigmatizan como hierba, y los insectos que se las comen son estigmatizados como plagas” (SCOTT, 1998:13, en CECEÑA, 2008:72). En efecto, el capitalismo no sólo mercantiliza la naturaleza sino que el propio capital “rehace a la naturaleza y a sus productos biológica y físicamente (y política e ideológicamente) a su propia imagen y semejanza” (O’CONNOR, 2003:33) en una transformación que selecciona a algunos componentes de la naturaleza como mercancías y a otros como desechos, además de las modificaciones que introduce, a través de la ciencia y la tecnología, para obtener nuevas cualidades de esas mercancías; el ejemplo más claro de esto son los organismos genéticamente modificados (OGM). Paralelamente se

profundizaron los esquemas productivos de extracción y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de grandes empresas nacionales y multinacionales como la minería a cielo abierto. Los mayores reservorios de recursos naturales se encuentran, hoy en día, en territorios habitados por campesinos, indígenas, y pobladores de las pequeñas ciudades rururbanas de diferentes regiones de nuestro continente. En tal sentido, resulta importante rescatar aquellas formas de producción campesinas e indígenas que sobrevivieron a distintos modos de producción desde los comienzos de la agricultura, adaptándose a los cambios productivos y a las presiones estructurales y políticas de los cambios económicos a nivel mundial; resistiendo desde su forma de producir y reproducir la vida campesina e indígena, ligadas a la producción para el autoconsumo, en una relación de reciprocidad con la naturaleza (GARCÍA GUERREIRO y WAHREN, 2014). En efecto, otros actores sociales como por ejemplo trabajadores desocupados o experiencias de producción agroecológicas, también han comenzado a experimentar alternativas de producción, comercialización y utilización de los recursos naturales que implican algunas rupturas con el modelo de desarrollo hegemónico. En esta dirección, retomamos a Arturo Escobar quien afirma que:

“la construcción de paradigmas alternativos de producción, órdenes políticos, y sustentabilidad son aspectos de un mismo proceso, y éste proceso es impulsado en parte por la política cultural de los movimientos sociales y de las comunidades en la defensa de sus modos de naturaleza/cultura. Es así como el proyecto de movimientos sociales constituye una expresión concreta de la búsqueda de órdenes alternativos de producción y ambientales” (2000:202).

En definitiva, lo que diferencia a estos movimientos sociales de la lógica hegemónica del “sistema/mundo colonial/capitalista” (WALLERSTEIN, 1989) es que mantienen una relación de reciprocidad y pertenencia con el territorio y la naturaleza. En efecto, “muchas comunidades rurales del Tercer Mundo “construyen” la naturaleza de maneras sorprendentemente distintas de las formas modernas predominantes; entienden, y usan, sus entornos naturales de maneras muy particulares” (ESCOBAR, 2000:77). Por medio de esta relación de reciprocidad reifican sus identidades, a la vez que disputan un modo de vida y una cosmovisión particular en pugna con otros actores. En este sentido, las acciones colectivas de los movimientos indígenas y campesinos, así como los de los sectores populares urbanos y rururbanos están:

“asociando los nuevos derechos culturales con reivindicaciones por el acceso y la apropiación de la naturaleza en los que subyacen estrategias de poder, valores culturales y prácticas productivas alternativas. A los nuevos derechos culturales y ambientales se están incorporando demandas para autogestionar las condiciones de producción y los estilos de vida de los pueblos” (LEFF, 2007:70).

La relación de reciprocidad y/o pertenencia con la naturaleza por parte de los movimientos sociales implica una relación que va más allá- incluso de manera contrapuesta- de la forma de relacionamiento con la naturaleza que asume la lógica racional económica estatal/colonial/capitalista que mercantiliza y objetiviza a la naturaleza y al territorio resignificándolos como recursos naturales, a la vez que destruye sistemáticamente otras posibles formas de entender y relacionarse con la naturaleza, otros usos y sentidos acerca del territorio.

Breves apuntes sobre el contexto político-económico del Ecuador

En las últimas décadas el Ecuador sufrió grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Desde finales de los años ochenta los gobiernos estuvieron signados por la aplicación de políticas neoliberales que generaron profundas

reformas económicas y políticas. A su vez se desarrolló un largo y variado proceso de resistencias populares cuyo sujeto principal fueron los pueblos indígenas aglutinados principalmente en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). En efecto, esta organización -en alianza con otras organizaciones de sectores populares urbanos y rurales- realizó distintos “levantamientos populares” a partir del año 1990, algunos de los cuales derrocaron a los gobiernos de turno, debilitados tanto por la aplicación de estas reformas neoliberales como por el creciente descreimiento de la clase política institucional por parte de la mayoría de la población. Finalmente en el año 2005, un levantamiento popular protagonizado por sectores populares y clases medias urbanas, conocido como los “forajidos”, forzó la renuncia del entonces presidente Lucio Gutiérrez dando paso a un proceso de transición política que dio origen al triunfo electoral de Rafael Correa. Este último asumió su gobierno retomando algunas de las demandas populares de los movimientos sociales que habían protagonizado las acciones colectivas de protesta en las últimas décadas. Esto se combinó con la creación de fuertes políticas de regulación estatal de algunos sectores de la economía, así como la ampliación y masificación de algunos planes sociales, invirtiendo también gasto público en mejoras de la salud y la educación públicas (RAMÍREZ, 2010). Este nuevo proceso político abierto a partir de los sucesivos gobiernos de Rafael Correa, denominado como “Revolución Ciudadana”, se inscribe en el ciclo de gobiernos “progresistas” de América Latina que caracterizamos anteriormente y cuyos matices y especificidades exceden el presente trabajo. En este marco, el gobierno de la “Revolución Ciudadana” ha tenido fuertes tensiones con gran parte de los movimientos sociales, principalmente con las organizaciones de trabajadores, el movimiento estudiantil universitario y la mayor parte del movimiento indígena ecuatoriano organizado en la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Otras organizaciones indígenas y campesinas se han mantenido como aliadas del gobierno de Rafael Correa ya que apoyan las políticas de ampliación de derechos sociales y su alineamiento con los procesos “progresistas populares” del resto de América Latina (RAMÍREZ, 2010; DELATORRE, 2010 y TRUJILLO, 2010). Sin embargo, la mayor parte de los conflictos con los movimientos sociales se han dado en torno a los recursos naturales estratégicos como el agua, la tierra, los hidrocarburos y diversos minerales en regiones donde habitan principalmente campesinos e indígenas que mantuvieron sus procesos organizativos y de resistencia en un contexto de fuerte judicialización y división de los movimientos populares (DÁVALOS 2010).

En este marco, el propio gobierno presenta contradicciones entre la nueva constitución, que propugnó por una importante reforma constitucional que consagra, entre otros derechos políticos y sociales de avanzada, los derechos de la naturaleza, que luego son violentados por el avance de las políticas extractivas impulsadas por el propio gobierno de Rafael Correa, en franca contradicción con la Constitución nacida de la “Revolución Ciudadana” (GUDYNAS y ACOSTA, 2010; DÁVALOS, 2010 y 2013).

El Ecuador se divide en tres zonas geográficas y culturales diferenciadas: la Costa, la Sierra y la Selva. La Costa comprende la región occidental del país con el litoral marítimo que bordea al océano pacífico. La ciudad de Guayaquil es su principal centro económico y político regional y la tenencia de la tierra se encuentra concentrada en grandes terratenientes o emprendimientos de agronegocios ligados a grandes capitales nacionales y transnacionales. La región de la Sierra se encuentra en el centro del país y su centro político y económico es la capital del país, Quito, y la mayor parte de su población es de origen indígena o mestizo. La región de la Selva corresponde a la Amazonía ecuatoriana, donde la principal actividad económica ha sido la explotación forestal y de los hidrocarburos, principalmente en la región norte de la selva amazónica.

La actividad económica del Ecuador ha sido tradicionalmente la producción de materias primas para la exportación, por un lado la producción agrícola ligada a los frutales, principalmente la banana, y otros cultivos a gran escala en la zona de la Costa ecuatoriana. Por otro lado, se encuentra también la exportación de flores de alta calidad para el mercado internacional en la región andina de Cayambe y zonas aledañas. También la actividad hidrocarburífera es importante y significó históricamente un ingreso importante en la renta

nacional. Precisamente algunos de los yacimientos amazónicos son los que actualmente han generado diversos conflictos sociales y territoriales entre las empresas y el Estado frente a las comunidades indígenas y campesinas que junto a organizaciones ecologistas se oponen a la ampliación de la frontera hidrocarburífera en la región, siendo la más conocida la de la reserva del Yasuní. Sin embargo, en los últimos años la actividad que mayor potencialidad aparece en el país es la de extracción minera a gran escala, denominada mega minería por su sistema de explotación a “cielo abierto”. Es con respecto a este crecimiento de la actividad minera donde se han generado diversos procesos de resistencia y acciones colectivas de protesta en oposición a esta actividad extractiva, donde el caso paradigmático del Ecuador es el del Valle del Intag, pues también, como veremos en el próximo apartado, puede observarse -además de los procesos de resistencia- la construcción de alternativas productivas y sociales locales exitosas que favorecen el antagonismo a la idea de “desarrollo y progreso” de la megaminería.

En síntesis, el gobierno de Correa mantuvo a la economía dolarizada (manteniendo la obturación a la soberanía monetaria del Ecuador), y se fortaleció un proceso reprimarización de la economía (diversificando la extracción de hidrocarburos y productos primarios agropecuarios con la extracción de minerales) en el marco de una, mayor regulación estatal y gasto público en salud y educación (así como en planes sociales); junto a una mayor inversión en infraestructura de caminos y otros elementos estratégicos que sin embargo no permitieron un cambio estructural del modelo económico que caracterizamos como Neodesarrollista y. Neoxtractivista (GUDYNAS Y ACOSTA, 2010, DÁVALOS, 2010).

Los procesos de acción colectiva del Valle de Intag: de la resistencia social a la construcción de alternativas locales

El Valle de Intag es una región subtropical dentro del Municipio de Cotacachi de la Provincia de Imbabura. La misma está ubicada en la región de la Sierra, a aproximadamente 140 km. de la ciudad de Quito. Pese a la cercanía con la ciudad capital las vías de acceso son limitadas por encontrarse en una región montañosa. La zona posee un microclima especial que habilita la posibilidad de realizar una gran diversidad de cultivos, principalmente, café, porotos, maíz y una gran variedad de frutales. Además de este microclima, la zona cuenta con aguas termales y una belleza paisajística que hacen de esta región una fuente potencial de actividades turísticas y de recreación. En términos demográficos el Cantón de Cotacachi cuenta con una población rural del 76% de sus habitantes mientras que el resto vive en la ciudad de Cotacachi o emplazamientos urbanos menores (INEC, 2010). La población es mayoritariamente indígena, aproximadamente un 60%, mientras los mestizos son el 35% y los afroecuatorianos un 5% (LÓPEZ OROPEZA, 2011). El cantón de Cotacachi ha sido gobernado desde el año 1996 por alcaldes indígenas, el primero, Auki Tituaña, pertenecía al Movimiento Pachakutik, ligado a la CONAIE y gobernó hasta el año 2009. Posteriormente lo sucedió Alberto Andrango, también indígena, ligado al partido gobernante, Alianza País, referenciado en la figura de Rafael Correa. El hecho de que los gobiernos municipales estuvieran conducidos por referentes indígenas, ayudó al proceso de acción colectiva del Valle de Intag, principalmente durante el gobierno de Auki Tituaña.

“El gobierno municipal, liderado por un indígena, abrió las puertas de gobierno para la gente, (...) díganos qué tenemos que hacer. Entonces nosotros ahí como Intag presentamos ciertas resoluciones, una de la cual es crear una ordenanza ecológica para declarar el cantón como cantón ecológico y fue aprobada, entonces en el año 2006 ya fue ley”. Carlos Zorrilla- Fundador de DECOIN (Defensa de la Conservación Ecológica de Intag).

Los procesos de acción colectiva de los pobladores del Valle de Intag- comenzaron en oposición a diferentes proyectos de explotación minera en la región por parte de compañías transnacionales de Japón y Canadá. En el año 1995 la empresa japonesa Mitsubishi comenzó la exploración para un proyecto de explotación de diferentes minerales, principalmente cobre. El primer espacio organizativo fue la organización ambientalista “Defensa de la Conservación Ecológica de Intag” que fue la principal promotora de la difusión de las consecuencias ambientales y sociales que podría provocar en la región una actividad extractiva como la megaminería. Con el correr del tiempo esta organización fue la referente y articuladora de los distintos proyectos productivos y de los enlaces internacionales, ya sea para las denuncias y la solidaridad internacional así como para los apoyos económicos de ONG’s y organismos internacionales de apoyo al “desarrollo sustentable”.

“Cuando nos enteramos que estaba esta empresa por aquí nos conformamos en la DECOIN y ahí empezamos a trabajar con las comunidades y nosotros a educarnos de qué se trataba, qué era la minería, por qué estaban por aquí, etc. Y resulta que era un proyecto entre gobiernos para impulsar la minería. Entonces con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales logramos que saquen un estudio de impacto ambiental lo cual comprobó que iba a ser un proyecto devastador, destrucción de comunidades, contaminación con metales pesados del agua, deforestación masiva, etc”. Carlos Zorrilla- Fundador de DECOIN (Defensa de la Conservación Ecológica de Intag).

En relación al estudio de impacto ambiental otro de nuestros entrevistados afirma que el mismo:

“Motivó todo un proceso social de resistencia que ha durado más de quince años y que ha logrado generar una conciencia regional sobre el tema minero”. José Cuevas- Referente de Corporación Toisán.

La amenaza de un proyecto minero constituyó una condición de posibilidad para la configuración de una identidad común en la heterogénea composición social y cultural del Valle Intag.

“Nosotros decimos que gracias a la minería nosotros aquí nos organizamos y gracias a eso hemos logrado tener una idea común del proyecto y del futuro de emprendimientos alternativos”. José Cuevas- Referente de Corporación Toisán.

Luego de numerosas movilizaciones y un largo proceso de organización, los pobladores lograron frenar el proyecto minero en 1997. Para ello desplegaron una serie de acciones colectivas de protesta, como cortes de caminos y movilizaciones, en combinación con petitorios, cartas a las autoridades, presentaciones de amparos judiciales a nivel nacional e incluso internacional.

“En vez de sólo salir a las calles, eso es difícil de sostener. Entonces se utilizó las cortes a nivel nacional, internacional, crear alternativas económicas para que la gente no diga que sólo tenemos la minería, fueron una gama de acciones, y el trabajo con los gobiernos locales (...) Aquí el gobierno municipal declaró 18 mil hectáreas de áreas protegida justo donde está la área minera, esa es otra arma interesante”. Carlos Zorrilla- Fundador de DECOIN (Defensa de la Conservación Ecológica de Intag).

Así es como se fue conformando un entramado organizativo donde intervinieron un conjunto heterogéneos de actores- campesinos, comerciantes, ONG’s socio-ambientales, Estado municipal, etc.- que construyeron una compleja coordinación que no estuvo exenta de tensiones y conflictos pero que se mantiene, con períodos de latencia, hasta la actualidad.

“Logramos convencer a las comunidades que no encajaba este tipo de desarrollo en lo que nosotros queríamos. Las comunidades se reunieron,

botaron a Mitsubishi, en mayo del 97 Mitsubishi se fue”. Carlos Zorrilla-Fundador de DECOIN (Defensa de la Conservación Ecológica de Intag).

“Empezamos a trabajar nosotros en buscar alternativas económicas para la gente porque ahí quedó el cobre, y una cosa es parar un proyecto y otra cosa es sostener esa lucha (...) nace lo que es el turismo ecológico de Junín, el proyecto de caficultores, apoyo a organizaciones de mujeres, etc. (...) fue el estímulo para organizarse en la zona de Intag, esta era un área totalmente desorganizada”. Carlos Zorrilla- Fundador de DECOIN (Defensa de la Conservación Ecológica de Intag). Enero 2010

En este sentido, desde las organizaciones sociales y ambientalistas se crearon distintas cooperativas cuyo caso más paradigmático fue la conformación de una cooperativa de productores caficultores. En la actualidad la “Asociación de Caficultores del Valle del Intag” cuenta con alrededor de cuatrocientos socios que son pequeños agricultores campesinos de la zona que reconvirtieron sus cafetales, tradicionalmente utilizados para el autoconsumo, en una variedad del café “arábiga” muy buscado en los mercados internacionales y que, con el asesoramiento de técnicos agrónomos integrantes de las organizaciones que protagonizaron las acciones de protesta contra los emprendimientos mineros, pudieron desplegar estrategias de producción, almacenamiento y comercialización exitosas tanto para el mercado nacional como internacional que hoy en día exporta café de alta calidad a Japón y varios países de Europa dentro del esquema de comercialización del llamado “Comercio Justo”.

“La Cooperativa es una organización con cuatrocientos pequeños productores de café. La organización se motivó como una alternativa a la gran minería aquí en la zona de Intag. Empezamos cuando se logró botar a una compañía minera japonesa, ahí surgió la idea de buscar alternativas productivas, digamos, porque la comunidad quedó dividida, había necesidad de proyectos alternativos. Entonces dijimos, vamos a hacer agricultura pero que sea orgánica, un poco también afín a los criterios de la lucha contra la minería, la defensa del medio ambiente, ese tipo de cosas. Pero la idea no era solamente sembrar café, sino terminar toda la cadena, sembrar y procesar y distribuirlo también”. Entrevista a Edmundo Varela- Presidente de la Asociación de Caficultores del Valle del Intag- Ecuador. Enero 2010.

De esta manera las organizaciones sociales proponen un esquema productivo alternativo a la idea hegemónica de “desarrollo” que habilitó un entramado social, económico y cultural que perdura hasta la actualidad y les permitió rechazar nuevos proyectos mineros, en particular el de la empresa canadiense “Ascendant Cooper Corporation” que comenzó sus operaciones de exploración en el año 2004.

“Es muy importante que la comunidad le pare la exploración porque a veces dicen que van a explorar nomás, que no van a explotar, y eso no causa impacto. Pero la comunidad sabía muy bien que si encuentran algo va a ser imposible frenar (...) Es que ya estábamos preparados, botamos a Mitsubishi pero sabíamos bien que el cobre estaba ahí, entonces cuando entró esta otra ya teníamos una resistencia más organizada, y todos los gobiernos locales en contra de la minería, eso fue muy importante”. Carlos Zorrilla- Fundador de DECOIN (Defensa de la Conservación Ecológica de Intag). Enero 2010

Esta empresa realizó una intensa campaña en las comunidades del Valle de Intag para obtener el consentimiento de los pobladores. Por un lado se planteó una estrategia de dividir las comunidades y los proyectos productivos a través de subsidios y “planes de desarrollo”.

“Este asunto de la lucha minera nos ha frenado, siempre ha sido avanzando en el desarrollo de nuestra propuesta, pero con el pie en el freno. Necesitas recursos para dedicarte al tema de la producción de café, pero también necesitas tiempo y recursos para la lucha minera. O te están hostigando o...

por ejemplo, la empresa minera puso otra asociación de productores de café aquí (...), la idea de la empresa minera era romper el hilo socio- organizativo que tenemos nosotros, pero no lo consiguieron. Ahí nos dimos cuenta de que éramos fuertes en el sentido de la apropiación de lo nuestro, porque era muy fácil ir con el saco de café, si aquí te pagan 10 y allí te pagan veinte (...) pero sin embargo se venían con nosotros, este es el café de mi organización y acá vamos”. Entrevista a Edmundo Varela- Presidente de la Asociación de Caficultores del Valle del Intag- Ecuador.

De este modo, además de la estrategia de cooptación y división, incluso con proyectos productivos que competían con las cooperativas conformadas por los pobladores del Valle que habían protagonizado las acciones colectivas contra la minería, la empresa desplegó una estrategia de represión y amenazas a las organizaciones sociales y ambientalistas donde incluso intervinieron grupos paramilitares para reprimir las movilizaciones y acciones colectivas de protesta en la zona.

“En mayo de 2004 entró esta nueva empresa canadiense y ahí empezó con otra estrategia. Tenían mucho dinero y muy agresivamente una vez que ya no consiguieron entrar ya empezaron las amenazas, los enfrentamientos entre comunidades, vecinos, un montón de conflictos que culminó con la entrada a la fuerza de paramilitares contratados por la empresa minera a través de tres empresas de seguridad (...) Con tanta presión nacional e internacional el gobierno se vio obligado a retirarle la concesión minera, eso fue en 2008”. Carlos Zorrilla- Fundador de DECOIN (Defensa de la Conservación Ecológica de Intag).

“Fueron como cinco o seis años terribles acá en Intag porque esta empresa utilizó todas las estrategias y tácticas posibles para destruir la resistencia. Especialmente una, nosotros le llamamos una “guerra de baja intensidad” contra la población porque enjuiciaron a más de... en Intag llegamos a tener diecisiete casos de gente judicializada por la empresa, se los acusaba de terrorismo, de sabotaje, de secuestro, de robo, de portar armas... José Cuevas- Referente de Corporación Toisán.

Así, en el año 2008 esta empresa canadiense también se retiró de la región luego de que las movilizaciones contra la explotación minera continuaran por parte de los pobladores, a las que se sumó una amplia campaña a nivel nacional e internacional denunciando el accionar de la empresa.

Posteriormente el gobierno de Rafael Correa intentó una nueva avanzada de un proyecto minero en la zona, en este caso con capitales trasnacionales y estatales, y que actualmente también se encuentra frenado por las acciones organizativas de los pobladores (ZORRILLA, 2011)¹.

Lo que nos interesa destacar es este artículo es que este proceso de acción colectiva no sólo implicó el desarrollo de acciones de protesta, sino que a su vez estuvo acompañado por la creación de alternativas al “desarrollo” ancladas en el territorio y en las matrices culturales de los habitantes del Valle del Intag. En este sentido uno de los entrevistados afirma que:

“Lo de la zona de Intag no ha sido solamente esa parte, es decir, resistir incluso con el cuerpo a las mineras, ha sido también desde un primer día hacer propuestas porque siempre ha habido un discurso perverso del Estado y de las empresas sobre el tema de la pobreza y el desarrollo. Y como les decía esta es una zona que no tenía mucha vinculación con el mercado, no tenía una economía de mercado sino una economía de subsistencia. El discurso del estado ha sido eso “está mal, que cómo puede

¹ Este último proceso excede los objetivos de este artículo, sobre el mismo trabajaremos en futuras investigaciones.

ser posible, que ustedes son miserables, no tienen cosas, no tienen plata”, entonces, frente a ese discurso la gente terminó por hacer propuestas de desarrollo económico, para demostrar tal vez que sí es posible sin necesidad de recurrir a la minería. Y entonces en esos quince años surgieron como más de diez organizaciones sociales ambientalistas y productivas. José Cuevas- Referente de Corporación Toisán.

En el proceso de resistencia contra la minería fue clave la posibilidad de crear y sostener en el tiempo distintos emprendimientos organizativos, productivos, comunitarios y culturales que fortalecieron las acciones colectivas de protesta, así como resignificaron el propio territorio y las identidades de los distintos actores sociales del Valle de Intag. Todo este entramado permitió a este heterogéneo movimiento social establecer, no sólo un relato crítico al desarrollo hegemónico, sino que a su vez pusieron en práctica alternativas concretas al mismo que permitieron mejorar la calidad de vida de sus habitantes respetando sus propios paradigmas culturales de lo que ellos entiende por “desarrollo”; en el marco de una lógica de reciprocidad con la naturaleza.

Conclusiones

En el marco de las disputas por los territorios y los recursos naturales, la experiencia de acción colectiva de los pobladores del Valle de Intag marca un hito de la resistencia contra las nuevas formas que adquiere el modelo “neodesarrollista extractivo” en Ecuador al que -a las actividades extractivas tradicionales (hidrocarburos, bananos y otros cultivos extensivos)- se le han sumado la megaminería en la Selva y la Sierra y los agrocombustibles en la Costa. Modelo que implica, por cierto, una de las contradicciones más fuertes del gobierno de Rafael Correa en torno a, por ejemplo, una Constitución política que reconoce los “derechos de la naturaleza” y un Estado que propugna en Sumak Kawsay (el “Buen Vivir” de la cosmovisión de los pueblos kichwa), con un accionar de gobierno que impulsa el desarrollo de mega emprendimientos mineros que afectan fuentes de agua, ecosistemas y entramados sociales campesinos e indígenas centenarios y algunos, incluso, milenarios.

Este hito que señalamos de las acciones colectivas en el valle de Intag, no es solamente por ser una de las primeras experiencias de acción colectiva contra la megaminería en el Ecuador, sino porque su despliegue en el territorio permitió la creación de alternativas concretas al modelo extractivo. En efecto, este proceso tuvo la característica de presentar un escenario de resistencia a través de acciones de protesta -que, como vimos, incluyeron la construcción de exitosas redes de solidaridad y alianzas a nivel regional, nacional e internacional- a la vez que lograron conformar un esquema productivo que integró al conjunto del territorio, otorgando una identidad social, construida en el propio proceso de acción colectiva, y conformando una alternativa productiva exitosa en términos económicos y sustentable en términos ambientales y reafirmando y reificando los lazos sociales de los pobladores de la región. En este sentido, afirmamos que en los procesos de disputa por el territorio, los habitantes del Valle del Intag -conformados como un heterogéneo “movimiento socioterritorial”- propugnaron una resignificación territorial anclada en las acciones colectivas de protesta pero también en las propuestas alternativas construidas desde los momentos de latencia de la acción colectiva que nos permitirían esbozar la hipótesis de que se encuentran construyendo un “campo de experimentación social” que conduce a la conformación de un entramado territorial que podemos caracterizar como “territorio insurgente” retomando las consideraciones planteadas en este artículo. Cabe señalar nuevamente que este proceso no estuvo -ni se encuentra- exento de tensiones y conflictos latentes y visibles entre las propias comunidades que conforman el Valle de Intag y que son muchos los desafíos y limitantes a superar por estos emprendimientos productivos, a los cuales se suma la posibilidad latente de que un nuevo emprendimiento minero intente instalarse en la zona, provocando nuevamente la reorganización de las acciones colectivas de protesta.

En todo caso, la experiencia del Intag también marca la posibilidad de la construcción de un territorio donde la dinámica del “desarrollo” es cuestionada, no sólo por acciones de protesta, sino por el despliegue de formas alternativas de practicar y habitar el territorio a través de una gama de proyectos productivos articulados que otorgan nuevos usos y sentidos a la naturaleza, asociados a dinámicas de reciprocidad y sustentabilidad armoniosa entre las necesidades de los pobladores y la reproducción de la naturaleza y el medio ambiente.

Bibliografía

ACOSTA, A. Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. In: GRUPO PERMANENTE DE TRABAJO SOBRE ALTERNATIVAS AL DESARROLLO **Más allá del desarrollo**. 1. Ed. Quito: Abya Yala- Fundación Rosa Luxemburg, 2011, p. 83-118.

AGUILÓ, V. y WAHREN, J. Los bachilleratos populares de Argentina como “campos de experimentación social”, **Revista Argumentos. Estudios Críticos de la Sociedad**, México, enero-abril 2014, Año 27, Nº. 74. p. 99-117.

BEBBINGTON, A. **La globalización de la gobernanza ambiental: relaciones de escala en los movimientos socio ambientales y sus implicaciones para la gobernanza ambiental en zonas de influencia minera de Ecuador y el Perú**, 1. ed. Manchester: Universidad de Manchester, 2006.

BEBBINGTON, A. (ed.). **Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales**, 1. ed. Lima: IEP: CEPES, 2007. Vol. 2.

CARDOSO, F. H. y FALLETO, E. **Dependencia y desarrollo en América Latina**, 29. ed. México: Siglo Veintiuno Editores, 1999. p.213

CECEÑA, A. E. **Derivas del mundo en el que caben todos los mundos**, 1 ed. México: CLACSO - Siglo XXI Editores, 2008. p.144

DÁVALOS, P. **La democracia disciplinaria**. El proyecto posneoliberal para América Latina, 1. ed. Quito: CODEU, 2010.

DÁVALOS, P. Diálogo y poder: los simulacros de la democracia. **Íconos- Revista de Ciencias Sociales**, Quito, julio 2001, Nro. 11, p. 6-16.

DE LA TORRE, C. El gobierno de Rafael Correa: posneoliberalismo, confrontación con los movimientos sociales y democracia plebiscitaria. **Temas y debates**, Rosario, octubre 2010, Nro. 20, pp. 157-172.

ESCOBAR, A. El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?. In: VIOLA, A. (comp.) **Antropología del desarrollo**. Teoría y estudios etnográficos en América Latina, 1 ed. Barcelona: Paidós, 2000.

ESTEVA, G. Desarrollo. In: VIOLA, A. (comp.) **Antropología del desarrollo**. Teoría y estudios etnográficos en América Latina, 1 ed. Barcelona: Paidós, 2000.

FERNANDES, B. M. Movimientos socio- territoriales y movimientos socio- espaciales. **Observatorio Social de América Latina**, Buenos Aires, enero- abril 2005, Nro. 16, pp. 273-283.

GARCÍA GUERREIRO, L. y WAHREN, J. Campesinado, territorios en disputa y nuevas estrategias de comercialización de la producción campesina en la Argentina. **Veredas, Revista del pensamiento sociológico**. México, primer semestre 2014/Año 15, Nro. 28, pp. 297-342.

GIARRACCA, N. y TEUBAL, M. Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo. **Revista ALASRU Nueva Epoca**, 2010, Nro. 5, pp. 113 a 133.

GIARRACCA, N. (2005) La disputa por los recursos naturales en la Argentina. La ecología de escalas. **Conflictos globales, voces locales**, Buenos Aires, octubre 2005, Nro 1.

GIARRACCA, N. y TEUBAL, M. **Actividades extractivas en expansión ¿Reprimarización de la economía argentina?**, 1 ed. Buenos Aires: Antropofagia, 2013.

GUDYNAS, E., y ACOSTA, A. Si eres tan progresista ¿por qué destruyes la naturaleza? Neoextractivismo, izquierda y alternativas. **Ecuador Debate**, Quito, 2010, Nro. 79, pp. 61-82.

HARVEY, D. El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. **Socialist Register 2004: El nuevo desafío imperial**, Buenos Aires, 2005.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Ecuador. Disponible en <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/>. Acceso en: 10 de febrero 2015.

LARREA, C., BELMONT, P., PAGUAY, J., WALTER, M., y LATORRE, S. **Análisis multicriterial sobre las alternativas de desarrollo de Íntag**: escenarios prospectivos para las opciones de turismo-agricultura y minería. 1 ed. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2012, pp. 26.

LEFF, E. **Saber ambiental**: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder, 5 ed. México: Siglo XXI, 2007, pp. 414.

LÓPEZ OROPEZA, M. **Entre la identidad y la ruptura territorial**: la construcción socio-histórica y socio-económica en Intag, 2011, pp.157. Tesis de Maestría, Flacso Andes-Ecuador.

MELUCCI, A. ¿Qué hay de nuevo en los “nuevos movimientos sociales”? In: LASAÑA, C. y GUEFIELD, J. (Eds.) **Los nuevos movimientos sociales**. De la ideología a la identidad, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 1994.

O’CONNOR, J. ¿Es posible el capitalismo sostenible? In: ALIMONDA, H. (Comp.) **Ecología política**. Naturaleza, sociedad y utopía, Buenos Aires: CLACSO, 2003.

PORTO GONCALVES, W. Da geografia ás geo-grafias: um mundo em busca de novas territorialidades. In: CECEÑA, A. E. y SADER, E. (Coord.) **La guerra infinita**. Hegemonía y terror mundial. 1 ed. Buenos Aires: CLACSO, 2002, pp. 217- 256.

RAMÍREZ GALLEGOS, F. Desencuentros, convergencias, polarización (y viceversa). El gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales. **Nueva Sociedad**, Buenos Aires, mayo-junio 2010, Nro. 227, pp. 83-101.

SANTOS, B. **Crítica de la razón indolente**. Contra el desperdicio de la experiencia. 1 ed. Bilbao: Editorial Desclée, 2003, vol. 1.

SCOTT, J. **Seeking like a state**. Londres: New Haven - Yale University Press, 1998.

SVAMPA, M. Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales. ¿Un giro eco- territorial hacia nuevas alternativas? In: GRUPO PERMANENTE DE TRABAJO SOBRE ALTERNATIVAS AL DESARROLLO **Más allá del desarrollo**. 1. Ed. Quito: Abya Yala-Fundación Rosa Luxemburg, 2011, pp. 185- 218.

SVAMPA, M. y ANTONELLI, M. A. (ed.) **Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales**. 1ed. Buenos Aires: Biblos, 2009, pp. 319.

SVAMPA, M. y VIALE, E. (2014) **Maldesarrollo**. La Argentina del extractivismo y el despojo.1 ed. Buenos Aires: Katz Editores, 2014, pp. 425.

TEUBAL, M.; DOMÍNGUEZ, D. y SABATINO, P. Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema alimentario. In: GIARRACCA, N. y TEUBAL, M. (coord.) **El campo argentino en la encrucijada**. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad. 1 ed. Buenos Aires: Alianza Editorial, 2005.

TRUJILLO, J. L. Las organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa. **Íconos: Revista de Ciencias Sociales**. Quito, 2010, Nro. 37, pp. 13-23.

VIOLA, A. Introducción. In -----, (comp.) **Antropología del desarrollo**. Teoría y estudios etnográficos en América Latina, 1 ed. Barcelona: Paidós, 2000.

WAHREN, J. Territorios Insurgentes: La dimensión territorial en los movimientos sociales de América Latina. In: **Jornadas de Sociología**, IX, 2011, Buenos Aires.

WAHREN, J. Movimientos sociales y territorios en disputa: Experiencias de trabajo y autonomía de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, Salta. **Trabajo y Sociedad**, Santiago del Estero, Invierno 2012, Nro. 19, pp. 133-147.

WALLERSTEIN, I. **El Moderno Sistema Mundial**. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI. 5 ed. México: Siglo XXI Editores, 1989.

ZIBECHI, R. **Política y miseria. La relación entre el modelo extractivo, los planes sociales y los gobiernos progresistas**. 1 ed. Buenos Aires: Lavaca, 2011, pp. 191.

ZIBECHI, R. Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos. **Observatorio Social de América Latina**, Buenos Aires, enero 2003, Nº 9, pp. 185- 188.

ZORRILLA, C. **Choque de visiones sobre la política minera del Ecuador**. Disponible en: <http://www.aldeah.org/>. Acceso en: febrero 2015.

Recebido para publicação em 21 de fevereiro de 2015

Devolvido para revisão em 12 de maio de 2015

Aceito para publicação em 4 de agosto de 2015